

E

Editorial

Seguridad y más confianza

La cuenta pública presidencial genera expectativas en Los Ríos y en el país.

Cuando se pregunta a diferentes actores sociales y políticos qué esperan de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, la mayoría contesta: “medidas en seguridad ciudadana”. La idea cruza al país y a la región, porque el tema sigue preocupando muchísimo a la comunidad, considerando realidades cotidianas como el narcotráfico en las calles, los robos en las viviendas, la violencia y las incivildades. De hecho, una de las grandes banderas enarboladas durante la campaña electoral fue esta materia y se espera lineamientos claros que permitan avanzar. El ministro de Seguridad Martín Arrau adelantó que el 2 de junio -un día después de la cuenta- entregará esas directrices y también ha dicho que las medidas avanzadas hasta ahora como políticas públicas serán consideradas. Esas declaraciones causaron polémicas; pero sin duda es acertado no empezar desde cero, sino recoger las experiencias importantes ya logradas. En ese contexto, resulta muy relevante ver que los municipios y los gobiernos regionales han tomado roles frente a esta situación, con recursos, esfuerzos y organización. En Los Ríos todas las municipalidades trabajan en patrullas mixtas con Carabineros; en la mayoría existen comités vecinales con alarmas comunitarias, se ha instalado luminarias y cámaras de vigilancia; mientras que el gobierno regional ha destinado gran cantidad de presupuesto a financiar vehículos e infraestructura para Carabineros y la PDI. En la reciente cuenta pública del gobernador Luis Curtino destacó que este año hay proyectos presupuestados por casi \$38 mil millones de pesos destinados a este ítem y que incluyen también a Bomberos. Pese a esta voluntad, existe inquietud por la prevalencia de delitos especialmente en las zonas rurales. El abigeato, las plantaciones de marihuana, la instalación de bandas de crimen organizado en parcelas alejadas de las ciudades, el robo de transformadores eléctricos y otras situaciones que muchas veces se desconocen, siguen afectando a las comunidades y es preciso enfrentarlas con decisión. En primer lugar se debe incentivar la denuncia oportuna, garantizando a las víctimas que hacer este trámite no será “una pérdida de tiempo, porque todo sigue igual”, como muchos repiten hoy. Recuperar esa confianza también debería ser una meta de los planes de seguridad. En los discursos y en la práctica.